3155

Referencia: Detalle del proceso 23/05/2019 08:4

SENTENCIA

RELACIÓN: Siento como tal que en esta fecha la infrascrita Secretaria de la Sala, ha realizado la respectiva relación de la causa ante los señores Jueces que integran el Tribunal Especializado de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.- Lo que comunico para los fines de ley.- LO CERTIFICO.

VISTOS: La presente Acción Constitucional No.- 09292-2017-00011, sube a conocimiento de esta Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, con el fin de conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandados, respecto a la sentencia dictada por el Juez de la Unidad Judicial Penal con Competencia en Delitos Flagrantes con Sede en la Parroquia Febres Cordero del Cantón Guayaquil, Abg. Segundo Mina Sifuentes, quien declaró con lugar la demanda de Acción de Protección, interpuesta por MARJORIE CECILIA GARCIA MACIAS, en contra del DR. RICHARD ESPINOZA GUZMÁN, Presidente Directivo del IESS, y la ING. BERNARDINA YULLET ERAZO VALVERDE, Directora Provincial del IESS. Radicada la competencia en los infrascritos Jueces Constitucionales y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN.- Esta Sala tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso interpuesto al amparo del numeral 3, inciso 2º. del Art. 86 y artículo 178, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador, en relación con el artículo 24, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y de los artículos 159, 160 y 208 del Código Orgánico de la Función Judicial y por el sorteo de ley que obra de la instancia.- SEGUNDO: VALIDEZ DEL PROCESO.- En la presente causa se ha respetado el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes consagrado en el Art. 76 de la Constitución de la República, en concordancia con el Art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ergo, se declara su validez.- TERCERO: FUNDAMENTO DE HECHO Y DE DERECHO DEL LEGITIMADO ACTIVO.- De fojas 1 a 12 de los autos comparece MARJORIE CECILIA GARCIA MACIAS, quien interpone Acción de Protección en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, representado legalmente por el DR. RICHARD ESPINOZA GUZMÁN, Presidente Directivo y la ING. BERNARDINA YULLET ERAZO VALVERDE, Directora Provincial, quien manifestó lo siguiente: "El acto que impugna es el BLOQUEO al Derecho a la prestación del seguro de cesantía y a la devolución de fondos de reserva del que he sido objeto porque fui Jefe de la División Financiera de la Dirección Provincial de Educación del Guayas, hasta el 27 de febrero del 2014, los beneficios de la Ley de Seguridad Social constituyen, un derecho adquirido a lo largo de todos los años de trabajo y en virtud de normas jurídicas legítimas, vigentes y que fueron cumplidas estrictamente tomando en cuenta que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de acuerdo a lo que consta publicado estipula lo siguiente: "La Constitución la Ley de Seguridad Social, las resoluciones que dicta el Directorio del IESS, constituyen la normativa legal que rige a la Entidad en lo que a su organización, funciones y atribuciones se refiere". ANTECEDENTES: Fue Jefa de la División Financiera de la Dirección Provincial de Educación del Guayas, hasta el 27 de febrero del 2014, fecha en la cual LE LLEGÓ LA ACCIÓN DE PERSONAL DEL CESE DE SUS FUNCIONES, por Suspensión de puesto de Servidor Público No.- 5, de la Dirección Provincial de Educación Hispana del Guayas, existiendo un acuerdo No. 0015-14, del 03 de febrero del 2014, en el que, textualmente dice: "Art.2.- A partir del 1 de febrero del 2014, las actividades y responsabilidades que venían siendo ejecutadas por las Direcciones Provinciales De Educación Hispanas y Bilingües, serán asumidas por las nuevas Unidades Administrativas (Direcciones Distritales de Educación), de acuerdo a lo que se detalla y consta como situación actual la Provincia del Guayas: COMO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DEL GUAYAS Y COMO SITUACIÓN DEFINIDA DIRECCIÓN DISTRITAL 09001 XIMENA 1-PARROQUIA RURALES.- En todos sus artículos este Acuerdo, tiene disposiciones bien claras en cuanto a la parte financiera y entre generales se establece la Coordinación General Administrativa y Financiera (nueva nomenclatura, nuevos directivos) será la encargada de emitir los lineamientos generales que deberán seguirse para el proceso de cierre de saldos contables, presupuestarios, tesorería y nómina, así como el traspaso de bienes".- Lo que demuestra que no tiene ninguna acción financiera administrativa, y legal en la Dirección de Educación del Guayas; que el 22 de abril del 2015, la Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GUAYAQUIL, envió oficio No.- MINEEDUG-SEDG-2015-00075-OF, al economista Roberto José Romero Von Buchwald, Director Provincial del Guayas del IESS, donde pormenorizadamente explica y solicita que se la excluya como Representante Legal del Sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que se proceda con la transición de la historia laboral de esta Institución a la Dirección Distrital 09D01-Ximena 1 Parroquias Rurales Puná-Estuario del Río Guayas-Educación con RUC 0968597400001; que los funcionarios del IESS, alegan que el Ministerio de Educación tiene deudas; que la Directora Provincial del IESS-Guayas es conocedora que en el sistema del IESS, se ingresa la información manualmente y que recién van por el año 2011, y quien sabe cuándo finalizaran de ingresar todos los datos, en el área de AFILIACIÓN Y COBERTURA encargada del registro; que no sabe a cuánto asciende la deuda por el atraso de ambas instituciones, sin embargo el Ministerio de Educación ha realizado pagos de los valores que el IESS le ha proporcionado como deuda. Desde el 7 de febrero del 2014, fecha en la que le llegó la acción de personal del cese de sus funciones, por Suspensión de puesto de Servidor Público No.-5 de la Dirección Provincial de Educación Hispana del Guayas, después de un sin número de trámites y Audiencias entró la Defensoría del Pueblo y Autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pudo lograr que el IESS habilite la herramienta informática y pudo acceder a la jubilación durante el presente año 2016, pero por lo que establece la Ley de Seguridad Social en el Art., 76 cuyo texto dice: " Una vez que se estableciere glosa en contra de los empleadores y otros responsables del pago del sueldos y remisión de aportes y descuentos al Instituto o que tuviere a su cargo o manejen dinero o especies del Seguro Social, a estos se suspenderá el derecho a la prestación del Seguro de Cesantía y a la devolución de fondos de reserva. Esta situación se mantendrá hasta que por sentencia ejecutoriada, se declare la falta de responsabilidad de la persona o personas en esta disposición o hasta que se extinga la glosa por su pago". El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mantiene BLOQUEADOS MIS SUS FONDOS DE RESERVA Y LA PRESTACIÓN DEL SEGURO DE CESANTÍA, porque la glosa sigue constando como REPRESENTANTE LEGAL de una Institución que ya no existe, que dejó de laborar en febrero del 2014, y ha luchado y sigue luchando, porque ya ha pasado mucho tiempo, y agotado todas las instancias del IESS, que ya hablado con funcionarios, y presentado sendos reclamos ante la Directora Provincial del Guayas, y ante el Presidente del Consejo Directivo del IESS, y no ha podido obtener respuesta positiva para dar una solución a su problema; que es su beneficio, y derecho, que por ley le corresponde y que está siendo violentado".- CUARTO.- PRETENSÓN CONCRETA DEL LEGITIMADO ACTIVO: La accionante pretende que por medio de esta acción se declare la vulneración de derechos y se acepte la acción de protección disponiendo, que: 1.- Que mediante sentencia se ordene al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, el DESBLOQUEO DE SUS FONDOS DE RESERVA Y LA PRESTACIÓN DEL SEGURO DE CESANTÍA, que tiene acumulados y que representan sus derechos. 2.- Que implemente una política pública en cuanto a la manera de solucionar y actualizar los datos de afiliación y cobertura tanto del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL como del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.- QUINTO.- CONTESTACIÓN DEL LEGITIMADO PASIVO, A LA PRETENSÓN DE LA ACCIONANTE: Los demandados DR. RICHARD ESPINOZA GUZMÁN, en su calidad de Presidente Directivo y la ING. BERNARDINA YULLET ERAZO VALVERDE, en su calidad de Directora Provincial, representantes legales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, comparecen de fojas 57 a 60 para manifestar lo siguiente: "Los demandados impugnan y rechazan en su totalidad las aseveraciones de la legitimada activa, por no existir vulneraciones de derechos. Que la Acción de Protección no cumple los requisitos establecidos en el Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al ser situaciones correspondientes al ámbito del acto administrativo en el sector público. Asimismo que no existe vulneración de derechos constitucionales, ya que no existe ningún tipo de acción u omisión de autoridad pública. Que para que proceda la ACCIÓN DE PROTECCIÓN, tendría que prevalecer la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado y en el país si hay, como lo es el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; sin embargo la legislación contempla en el Código Orgánico General de Procesos LIBRO IV PROCESOS TITULO I, CAPITULO II PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO TRIBUTARIO Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN I, DISPOSICIONES COMUNES, Art. 300.- Objeto: "Las jurisdicciones contencioso tributaria y contencioso administrativa, prevista en la Constitución y en la ley, tienen por objeto tutelar los derechos de toda persona y realizar el control de legalidad de los hechos actos administrativos o de contratos del sector público sujetos al derecho tributario o al derecho administrativo, así como, conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico tributaria o jurídico administrativa, incluso la desviación de poder". Que al tenor de lo establecido en el Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que reza en su numeral 4: "cuando el acto administrativo puede ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere la adecuada ni eficaz".- Que por cuanto la accionante ha manifestado que impugna el BLOQUEO AL DERECHO A LA PRESTACIÓN DEL SEGURO DE CESANTIA, Y A LA DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE RESERVA, que esto se encuentra amparado en el Art. 76 de la Ley de Seguridad Social; que adicional, tal como lo establece el Art. 43 de la Ley de Seguridad Social, que es la COMISIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIÓN Y CONTROVERCIAS, siendo el órgano adecuado a seguir los valores bloqueados, vía administrativa y en el caso de que la accionante Sra. García Macías Marjorie Cecilia, retire los valores bloqueados; la cantidad por cesantía es de \$516,27 constante en la página del IESS en la OPCIÓN BLOQUEO O DESBLOQUEO DE LA CUENTA INDIVIDUAL siendo el estado del Afiliado: jubilada, Estado: Inactiva, Valor: \$516,27, correspondiente a su CESANTÍA, bloqueo por las obligaciones patronales, situación que corresponde actos administrativos. En el caso de bloqueo de Fondos de Reserva es por \$172,92, generando por juicios coactivos, siendo estos totalmente facultados por el artículo 38 literal a) de la Ley de Seguridad Social que reza: "Son atribuciones y deberes del Director Provincial, en la circunscripción territorial a su cargo: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, y la titularidad

de la jurisdicción coactiva del instituto, sin perjuicio de las facultades del Director General". El Dr. Holguer Lucero G. en su texto DOCTRINA Y PRACTICA DE LA ADMINISTRACIÓN, Concepto: "Los actos administrativos son medios a través de los cuales la administración pública desenvuelve sus actividades, manifiesta su voluntad, por lo mismo tiene el carácter de jurídicos...podríamos abundar en conceptos, pero este no es el propósito. Como una concepción ecléctica, concreta de voluntad manifestada en forma escrita, o verbal, que procede de una autoridad u órgano de la administración pública, en ejercicio de sus potestad formalidades establecidos en la ley, que determina efectos jurídicos directos en los administrados, en particular en relación con la administración o en otros entes públicos, efectos que implican ordenes que afectan a derechos y obligaciones de los mismos, en una esfera igualmente concreta y delimitada. Por lo mismo, el acto administrativo es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo". Por lo expuesto es menester indicar que no existe ningún tipo de violación de derechos constitucionales, sobre todo no se ha vulnerado el derecho a la integridad personal ni el derecho al buen vivir consagrado en los arts. 66 numeral 3 y art. 275 de la Carta Magna, que por lo tanto la reclamación de la acción, deberá realizarla por la vía Contenciosa Administrativa, por cuanto esta no es la vía, por lo tanto son cuestiones de mera legalidad, siendo estos actos administrativos de instituciones públicas, estos gozan de la presunción de legitimidad y por lo tanto son actos válidos, por lo que solicitan se declare sin lugar la presente acción constitucional".

SIXTO.- SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. - Convocada la audiencia en la fecha y la hora señalada, se le concedió la palabra al Abg. Gastón Ramírez Caicedo, quien en representación de Marjorie Cecilia García Macías, manifestó lo siguiente: "Comparezco a nombre de Marjorie Cecilia García Macías, ex empleada del Ministerio de Educación, hasta el 27 de febrero del 2014, fecha en la que llegó la acción de personal por cese de sus funciones. Señores Jueces, el Juez A quo en sentencia resuelve declarar con lugar la Acción de Protección, declarando vulneración de sus derechos constitucionales y como medida se dispuso dejar sin efecto el bloqueo de la cuenta individual de Cesantía y de Fondo de Reserva, concediendo un plazo de 15 días para la orden de desbloqueo; sin embargo debo informar que hasta la presente fecha no se ha cumplido con lo dispuesto, porque sigue bloqueada la cuenta y además ordenó una disculpa pública, lo cual tampoco se ha realizado. Me hallo en este recurso de apelación, por la impugnación del IESS, y en vista del no desbloqueo de la cuenta individual de mi representada. Hace unos días el IESS le supo indicar que no pueden desbloquear la cuenta, porque se estaría borrando la deuda, pero Señores Jueces la deuda no es de mi defendida, sino del Ministerio de Educación, porque existen certificaciones que el Ministerio es quien adeuda estos valores. Existe clara vulneración de los Derechos Constitucionales de mi defendida, ya que el IESS se niega en desbloquear la cuenta. La jubilación es un derecho universal, y se encuentra vulnerado por estar el Estado en mora. Aquí existen dos entidades morosas, el Estado Ecuatoriano y el Ministerio de Educación que son los que le deben al IESS, por lo que se han vulnerados los derechos constitucionales de la demandante".- Ejerciendo el Principio de Contradicción, se le concedió la palabra al Abg. Víctor Antonio Atocha Morales, quien a nombre y representación de Lic. Freddy Orellana Flores, Director Provincial Del Guayas Encargado y por el Dr. Richard Espinoza Guzmán, Presidente Ejecutivo del IESS, manifestó lo siguiente: "Señores Jueces es preciso indicar que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Juez A quo, es decir se ha entregado los Fondos de Reserva y Cesantía a la actora, porque existe registro de orden de pago por la cantidad de \$520,51, orden que se encuentra en documentos, que demuestran que se ha desbloqueado la cuenta individual de la accionante; asimismo tenemos un memorándum en cumplimiento de la sentencia de Acción de Protección 2017-00011, donde se comunica que se realizó la entrega del Fondo de Reserva con el valor de \$162,85; por lo que se demuestra que el Seguro Social ha cumplido con el desbloqueo de Fondos de Reserva y Cesantía. La actora inicialmente en su demanda solicitó que se desbloquee su cuenta individual, lo cual se ha cumplido. El IESS, impugna la sentencia, por las siguientes consideraciones: En la admisión de la prueba, de acuerdo a lo establecido al art. 27 del Código Orgánico de la Función Judicial, no se evidencia ningún análisis de las pruebas aportadas por el IESS, dejando en vulneración el derecho a la defensa; también se adjuntó 20 títulos de créditos con sus respectivos números de glosa, que fue ocasionado por la mora patronal. No compartimos la vulneración de derechos de la actora, porque es aplicando la Ley de Seguridad Social, art. 76. Debo decir que en el año que la actora se encontraba en representación del Ministerio de Educación, ya existía la mora patronal, por lo cual la actora debió plantear el Juicio de Coactiva y de Excepciones a la Coactiva para el Estado, lo cual no realizó. El IESS es del Estado, por lo tanto se encuentra en pleno apego a la Constitución y la Ley, por lo que, solicito se revoque la sentencia de primer nivel."- **SEPTIMO: DETERMINACIÓN DE LA VÍA IDÓNEA Y EFICAZ PARA RESOLVER EL ASUNTO CONTROVERTIDO.** - Para dar solución a este problema jurídico, y por así disponerlo la jurisprudencia vinculante N° 001-16-PJO-CC pronunciada por la Corte Constitucional el 22 de marzo del 2016, que en lo atinente al caso han emitido una regla con el carácter erga omnes: "Las Juezas y jueces constitucionales que conozcan de una acción de protección, deberán realizar un profundo análisis acerca de la real existencia de la vulneración de derechos constitucionales en sentencia sobre la real ocurrencia de los hechos del caso concreto. Las Juezas o Jueces Constitucionales únicamente, cuando no encuentren vulneración de derechos constitucionales y lo señalen motivadamente en su sentencia, sobre la base de los parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, podrán determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea y eficaz para resolver el asunto controvertido". Sobre dicha base los infrascritos jueces, procedemos a realizar el análisis que corresponde: Como quedó indicado ut supra, las vulneraciones constitucionales argumentadas por la legitimada activa, las encuentra en: la transgresión al derecho al debido proceso, en específico a la presunción de su inocencia; debida proporcionalidad; derecho a la defensa. Violaciones que conllevarían en la afectación a su derecho.-Sobre la base de las consideraciones realizadas en los números anteriores, este Tribunal, en cumplimiento de la jurisprudencia vinculante N° 001-16-PJO-CC, determina: 7.1.- Que la vulneración a los derechos constitucionales que se invocan no son objeto de protección de otras garantías jurisdiccionales; 7.2.- Siempre siguiendo a dicha jurisprudencia, se encuentra en el párrafo 11.3 : "Un segundo supuesto que se debe constatar a partir del requisito señalado en el artículo 40 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es que la vulneración a la que se alude en la acción de protección recaiga, en efecto, sobre el ámbito constitucional del derecho vulnerado. Anteriormente, esta Corte ha analizado las diferentes dimensiones que presentan los derechos, determinando que la justicia constitucional y en concreto, la acción de protección, tiene por objeto el amparo directo y eficaz de la, dimensión constitucional del derecho vulnerado". La norma citada, a la que hace referencia la Corte Constitucional, se encuentra íntimamente relacionada con lo dispuesto en el N° 4 del Art. 42 de la precitada ley, al respecto, es necesario reflexionar y considerar -como no puede ser de otra manera- lo manifestado por la Corte Constitucional dentro de la sentencia N° 041-13-SEP-CC, caso N°0470-12-EP publicado en el Registro Oficial N° 64, de fecha jueves 22 de agosto del 2013, en la que sostiene que sobre dichos derechos, específicamente, respecto de la garantía a ser juzgados por medio del procedimiento adecuado, así como del derecho a la protección judicial por medio de un recurso sencillo, rápido y efectivo. Considerando que la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses de las persona halla su reconocimiento constitucional en el artículo 75 de la Constitución de la República, así como en el Art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 12.4.-Disposiciones que encuentran, a su vez, en armonía con el Art. 76 del Código Ecuatoriano y 88 ídem que se refiere a la acción de protección, añadiendo en forma contundente: [...] La aplicación de los derechos y garantías descritos al caso en juicio, en concordancia con el objeto de la acción, lleva a la Corte a la misma conclusión de la accionante: los únicos procedimientos adecuados para conocer y resolver sobre la existencia de violaciones a derechos constitucionales son las garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales; y en el caso de que dichas violaciones se originen en actos u omisiones de autoridades públicas no judiciales, la acción de protección. Así, es claro que la distinción en el objeto de la acción de protección y los procesos de impugnación en sede contencioso administrativa, no está en el acto impugnado, sino en la consecuencia del mismo. Dicho de otro modo, coincidentemente con el accionante, esta Corte considera que las vías ordinarias, aunque también sirvan para impugnar actos de autoridades públicas no judiciales, no son adecuadas para declarar y reparar una violación a derechos constitucionales [...] Arribar a una solución diferente a la propuesta en el párrafo anterior, implicaría reconocer esquemas superados por el constitucionalismo ecuatoriano, como el carácter residual del extinto recurso de amparo constitucional, en razón del cual era necesario agotar las vías ordinarias en aras de "demostrar" su idoneidad y/o su ineficacia. Ello nos lleva al sentido interpretativo de la disposición contenida en el artículo 42 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De acuerdo con este artículo, la Acción de Protección es improcedente, cuando: "El acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz". Este artículo solamente puede ser entendido a la luz de las reflexiones anteriores, ya que la vía contencioso-administrativa no es ni puede ser considerada como una vía adecuada para reparar violaciones a derechos constitucionales, así como la Acción de Protección no lo es para controlar la legalidad de los actos administrativos. Por lo tanto, la carga de demostración sobre la adecuación y eficacia de los procedimientos ordinarios no recae sobre el accionante, sino sobre el juzgador, al momento en que determina si la violación efectivamente se verificó o no en el caso puesto en su conocimiento.- Cabe indicar que los presupuestos de procedibilidad de la Acción de Protección contenidos en el artículo 42 tiene un vínculo directo con el objeto de la misma: "...el amparo directo y eficaz de los derechos". Más allá de un postulado vacío, el contenido de la norma del artículo 88 de Constitución, la Carta Suprema tiene repercusiones medulares respecto del objetivo de la justicia constitucional, así como la manera de entender los problemas jurídicos, desde un análisis de legalidad del acto administrativo, a uno constitucional de los hechos que configuran una vulneración de derechos constitucionales. Es así que la causal del numeral 4 del artículo 42 impone la obligación jurisdiccional de justificar en la motivación de su sentencia si se verifica la existencia de una violación constitucional y, en caso de no encontrarla, discurrir sobre la vía que considera adecuada y eficaz para satisfacer la pretensión.- **OCTAVO: FUNDAMENTOS? DOCTRINARIOS Y JURISPRUDENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN.**-La autora Karla Andrade Quevedo, en su estudio "La Acción de Protección desde la jurisprudencia constitucional, Manual de Justicia Constitucional" Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional (CEDEC) de la Corte Constitucional del Ecuador, pp. 118 y 119. Quito, 2013, manifiesta: "De modo que el máximo órgano de interpretación constitucional de nuestro país ya ha determinado claramente que cuando ocurre una vulneración de

un derecho constitucional la única vía posible es la acción de protección. No existe, por tanto, otra vía idónea o eficaz puesto que la Constitución de la República ha sido clara en determinar que esta garantía opera únicamente para el amparo de derechos reconocidos en la Constitución. Por tanto, si existe otra vía posible que además resulta adecuada o eficaz es probablemente porque no se trata de un derecho de índole constitucional y el ordenamiento jurídico se ha establecido para ella un procedimiento específico [...] Por tanto, de acuerdo con lo determinado por la jurisprudencia constitucional, la acción de protección no constituye una acción que se pueda escoger como vía frente a cualquier vulneración de un derecho sino únicamente para aquellos derechos de fuente constitucional; las controversias que se suscitan en el ámbito de la legalidad no tiene cabida en esta acción. De modo que, mediante esta sentencia, la Corte nos deja ya delimitada la cancha. Usuarios, abogados, y jueces tienen perfectamente definido, tanto en una dimensión positiva como negativa, cual es la naturaleza de los derechos que se encuentran en protección por medio de esta garantía jurisdiccional [...] De ese modo, la Corte Constitucional, con su jurisprudencia, les ha impuesto un importante mandato a los jueces, pues ha determinado que a la hora de conocer una demanda de acción de protección, lo primero que deberán verificar es que efectivamente se trate de un tema de constitucionalidad y no de un conflicto de mera legalidad que no afecte un derecho constitucional".- Como ha quedado señalado, tanto la doctrina como la jurisprudencia, en materia constitucional, sostienen que la acción de protección no es un medio que pueda sustituir las acciones judiciales ordinarias o los recursos administrativos, pues ello conllevaría a la superposición de la justicia constitucional sobre la justicia ordinaria, así como al desconocimiento y a la desarticulación de la estructura jurídico del Estado. Por lo que la acción de protección no procede cuando el titular del derecho vulnerado cuenta con la posibilidad real de acceder a una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses en la vía ordinaria, por un lado; o, por la vía administrativa propia, por otro lado, especialmente, para demandar o recurrir de actos de la administración como los que se derivan de la especie". Por otro lado, existen circunstancias en las que si bien la persona considera que se han afectado sus derechos, la conducta denunciada no ataca directamente a la faceta constitucional del mismo, sino que el derecho ha sido quebrantado en su dimensión legal que si bien tiene siempre un trasfondo constitucional, pues todos los derechos se encuentran garantizados en la Constitución, no reclama la misma urgencia ni el mismo grado de celeridad que si se tratara de un derecho constitucional.- **NOVENO: ANALISIS DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS.**- La accionante manifiesta que la actuación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vulnera sus derechos Constitucionales consagrados en los Art.11 numerales 4, 5, y 6, Art.86 numeral 1; Art.38, Art.66 numeral 3, Art.275; Art.277 numeral 1 y Art. 76 de la Ley de Seguridad Social. Por lo que en este estado, es pertinente revisar lo que obra de autos y lo manifestado por las partes en la audiencia que sustentó el recurso de apelación, de fecha 24 de abril del 2017 a las 11h00. Al respecto, la accionante, trabajó para el Ministerio de Educación, y ocupaba el cargo de Jefa de la División Financiera de la Dirección Provincial de Educación del Guayas, hasta el 27 de febrero del 2014, fecha en el que dieron cese definitivo a sus funciones, por motivo de suspensión del puesto de Servidor Público No.- 5 de la Dirección Provincial de Educación Hispana del Guayas, mediante Acuerdo No. 005-14, del 3 de febrero del 2014; acuerdo que establece: "las actividades y responsabilidades que venían siendo ejecutadas por la Dirección Provinciales de Educación Hispana y Bilingües, serán asumidas por las nuevas Unidades Administrativas (Direcciones Distritales de Educación)", es decir que las funciones que desempeñaba la Dirección Provincial de Educación del Guayas, pasaron a otra identidad pública, esto es los Distritos de Educación, por lo que la accionante, actualmente no tiene ningún vínculo con la Dirección Provincial de Educación del Guayas, ya que fue desvinculada de su cargo financiero desde el 27 de febrero del 2014, y tendría todo derecho para acceder a sus beneficios sociales, por ser una adulta mayor jubilada y por lo tanto de atención prioritaria; en estricto apego a la Constitución Ecuatoriana, que en el Art. 35, ha conferido el derecho de atención prioritaria a ciertos grupos humanos que debido a sus condiciones particulares merecen una mayor protección por parte del Estado, entre los que están: "Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad", los cuales tendrán que recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.- Consecuentes con lo manifestado, el Juez Constitucional tiene la obligación de tomar medidas en beneficio de la efectividad de dicha protección especial. Así, entre mayor sea la desprotección de estos sujetos, mayor debe ser la eficacia de las medidas de defensa que se tomen, en aras de consolidar los principios que forman al Estado Constitucional de derechos y justicia.- Por otro lado, obra de fojas 13 el oficio No. MINEDUC-SEGD-2015-00075-OF, del 22 de abril del 2015, en el cual el Economista Roberto José Romero Von Buchawald, Director Provincial del Guayas, solicita al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que: "se excluya de sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como representante legal a la Sra. GARCIA MACIAS MARJORIE CECILIA con cedula de ciudadanía No. 0904641875 con responsabilidad hasta el cierre de la Dirección Provincial de Educación Hispana del Guayas con RUC NO. 0968511380001, y que se proceda con la transición de la historia laboral de esta Institución a la Dirección Distrital 09D01-Ximena 1 Parroquias Rurales Puná - Estuario del Río Guayas-Educación con RUC No. 0968597400001"; sin embargo la accionante actualmente no ha podido convenir a sus fondos de reserva y cesantía porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tiene su cuenta individual bloqueada, desde el 6 de agosto del 2014, así consta de fojas 21 y 22 del expediente, lo que evidentemente sería una violación a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, ya que por haber sido afiliada y actualmente jubilada, tendría todo derecho de acceder a su cuenta individual; por ello es evidente que el IESS al no atender la solicitud de desbloqueo, con su actuar ha violado, limitado, disminuido y anulado el goce o ejercicios de los derechos de la accionante; así tenemos el Art. 368 de la Constitución de la República, que establece: "El sistema de seguridad social funcionará con eficiencia, celeridad y transparencia"; en plena armonía con el Art. 369 que indica: "El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley". Así también, el Art. 82 de la Constitución de la República, establece: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes". Siendo el objetivo principal de la Acción de Protección, que en lo sustancial se circunscribe al otorgamiento de la tutela judicial efectiva, que por lo que a los Jueces Constitucionales adoptar medidas de suspensión o reparación tendientes a cesar o remediar de manera inmediata un acto u omisión imputable a cualquier servidor de la administración pública que haya causado un daño grave o irreparable que viole derechos fundamentales de las personas, constantes en la Constitución o en los Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos Humanos, ratificados por el Ecuador.- Para esta Sala, es claro que negarle lo reclamado a la accionante constituiría un acto violatorio, que menoscabaría su vida digna y su derecho al buen vivir, atentando su estado de adulta mayor, así como lo previsto en el Art. 371 de la Carta Magna, que establece: "Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras o empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado. Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada año en el Presupuesto General del Estado y serán transferidos de forma oportuna. Las prestaciones en dinero del seguro social no serán susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora, y estarán exentas del pago de impuestos"; y, considerando que el rol de los Jueces en el Estado Constitucional de Derechos y de Justicia es el de garantizar la aplicación inmediata de todos los derechos, conforme lo consigna el Código Orgánico de la Función Judicial, en su Art. 23.- "La Función judicial, por intermedio de las Jueces y Jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las Leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la Ley, y los méritos del proceso".- **DECISIÓN:** Por todo las consideraciones realizadas, que responden a las constancias procesales, los suscritos Jueces Provinciales de la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ADMINISTRANDO JUSTICIA CONSTITUCIONAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: CONFIRMAN la sentencia subida en grado, que declaró con lugar la demanda de Acción de Protección; consecuentemente se niega la apelación propuesta por los recurrentes. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, y en cumplimiento con lo previsto en los artículos 86 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador y 25 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y, de acuerdo con la Resolución del Pleno de la Corte Constitucional en sesión efectuada el 14 de octubre del 2015, que se dio a conocer al Presidente del Consejo de la Judicatura mediante oficio No. 4481-CCE-SG-SUS-2015, de fecha 23 de Octubre del 2015, remítase a la Corte Constitucional, copia de esta sentencia ejecutoriada dentro del término previsto en la ley, para el desarrollo de la jurisprudencia constitucional.-Forme parte del proceso los escritos presentados por la parte demandada.- NOTIFIQUESE.-